

**BOLETIN DE NOTICIAS**  
**COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID**  
 Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59  
 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección arriba señalada.

<b>BOLETÍN NÚMERO 312</b>		<b>FECHA: 15 de marzo de 2021</b>
<b>SUMARIO</b>		
<b>PAÍS</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>LAS NUEVAS ENCRUCIJADAS DE AMÉRICA LATINA</b>	<b>2</b>
	<b>DONDE DIJE DIGO, DIGO DEUDA</b>	<b>15</b>
	<b>CARTA DE PEDRO CASALDALIGA A FIDEL CASTRO</b>	<b>16</b>
<b>BRASIL</b>	<b>AL BORDE DEL COLAPSO SANITARIO, BRASIL SE TRANSFORMA EN UN RIESGO GLOBAL</b>	<b>17</b>
<b>COLOMBIA</b>	<b>EL EJÉRCITO COLOMBIANO ASESINÓ A 6.402 CIVILES</b>	<b>20</b>
<b>CUBA</b>	<b>MEDICOS CUBANOS HAN ATENDIDO CASI A UN TERCIO DE LA HUMANIDAD</b>	<b>21</b>
<b>MEXICO</b>	<b>20 AÑOS DE LA MARCHA DEL COLOR DE LA TIERRA, QUE MARCÓ “UN ANTES Y UN DESPUÉS” EN EL ZAPATISMO.</b>	<b>21</b>
<b>VENEZUELA</b>	<b>RELATORA ESPECIAL DE LA ONU: “ESTADOS UNIDOS Y EUROPA DEBEN LEVANTAR SANCIONES A VENEZUELA”</b>	<b>23</b>

# AMÉRICA LATINA

## **LAS NUEVAS ENCRUCIJADAS DE AMÉRICA LATINA**

La coyuntura regional está signada por el traumático escenario que generó la pandemia. América Latina ha sido uno de los epicentros internacionales de la infección, con dos países en el tope de fallecidos por millón de habitantes. Se vislumbra ahora el peligro de afrontar una segunda ola de la covid con pocas vacunas. El coronavirus se expandió en un terreno fértil para la explosión de los contagios, entre sectores empobrecidos y alojados en viviendas sin agua corriente. El hacinamiento impidió cumplir con los requisitos básicos del distanciamiento social y se registraron escenarios dantescos de venta de oxígeno, hospitales saturados y ausencia de camas.

Ese impacto fue más demoledor en las naciones afectadas por el desmantelamiento de la salud pública. En Perú, los tests fueron totalmente inefectivos ante la ausencia de atención primaria a los infectados. El país más ponderado por el neoliberalismo encabeza el porcentual de víctimas fatales.

El negacionismo criminal de Bolsonaro multiplicó en Brasil el número de fallecidos. El alucinado presidente recorrió las playas con arengas contra el distanciamiento social, mientras se acumulaban los muertos por asfixia en las terapias intensivas. Obstruyó todos los rescates y propició el descontrol de la enfermedad entre los estratos de menores ingresos.

Esos despiadados extremos han coexistido en la región con la improvisación, en todos los países que subestimaron la enfermedad e introdujeron cuarentenas tardías o inefectivas. En Argentina las políticas de protección evitaron la saturación de los hospitales, las muertes en las calles y las sepulturas colectivas. Pero el número de víctimas escaló cuando se dispararon los resguardos. La campaña de erosión que motorizó la derecha socavó todos los cuidados que el oficialismo no supo preservar.

Cuba demostró la forma de evitar esas vacilaciones. Con una estrategia solidaria de organización territorial garantizó la prevención y logró estabilizar un bajo índice de mortalidad.

El gran desafío actual es acelerar la vacunación para asegurar el descenso de la infección. Pero América Latina no logra acceder a las demandadas inyecciones. En el debut del operativo internacional contra la covid, las tres cuartas partes de las vacunas se han aplicado en 10 países avanzados. En 130 naciones que albergan a 2500 millones de habitantes todavía no se administró ninguna dosis y Sudamérica sólo recibió el 5% de las inmunizaciones distribuidas en el mundo.

Deterioro en todos los terrenos

El impacto económico-social de la pandemia ha sido tan severo como su efecto sanitario. Profundizó la desigualdad y afectó duramente al 50% de la masa laboral que sobrevive en la informalidad. Esos sectores acrecentaron sus deudas familiares para contrarrestar la brutal caída de los ingresos.

También la brecha digital se expandió con terribles consecuencias para los marginados de los servicios básicos de la comunicación. Sólo 4 de cada 10 hogares de la región cuentan con sistemas de banda ancha fija. Esa carencia impidió el funcionamiento de la educación a distancia y condujo a un año escolar perdido para la mitad de los niños y el 19% de los adolescentes[1].

La pandemia precipitó también un derrumbe económico mayúsculo. Se estima que la retracción del PBI osciló el año pasado en torno al 7,7%-9,1% del PBI. América Latina padeció la mayor contracción planetaria de horas de trabajo. Esta caída duplicó la media internacional, en consonancia con retrocesos del mismo porte de los ingresos populares[2].

Como la región arrastra un quinquenio de estancamiento, el coronavirus acentuó un deterioro descomunal. Hace pocos meses se preveía la desaparición de 2,7 millones

de firmas, la pérdida de 34 millones de empleos y la incorporación de 45,4 millones de nuevos pobres al universo de los desamparados[3].

Para colmo de males los indicios de recuperación son tenues. El pronóstico de crecimiento para el 2021 en la región (3,6%) es muy inferior al promedio mundial (5,2%). Si se corrobora esa estimación, el PBI latinoamericano retomará su nivel de la pre-pandemia recién en el 2024. Esos decepcionantes guarismos dependerán a su vez de la provisión de vacunas y la continuidad de un rebote económico sin nuevas cepas de la covid.

Una recuperación más acelerada deberá lidiar con el agotamiento de las reservas fiscales y monetarias, al cabo de un año de grandes socorros estatales. Es también dudoso el reinicio de un ciclo de endeudamiento masivo. El FMI continúa emitiendo hipócritas mensajes de colaboración, pero en los hechos se ha limitado a implementar un irrisorio alivio del pasivo entre pocas naciones ultra-empobrecidas. Repite la actitud que asumió en la crisis del 2008-10, ponderando la regulación en medio de la tormenta y afinando sus tradicionales exigencias de ajuste.

El coronavirus tampoco sensibilizó a las empresas transnacionales. Prescindieron de cualquier disfraz humanitario, continuaron exigiendo pagos y remitieron utilidades. Los gobiernos latinoamericanos que han suscripto tratados internacionales de "protección de inversiones", afrontaron nuevas demandas por cifras descomunales en medio de la tragedia sanitaria[4].

La covid agravó, por lo tanto, todos los desequilibrios generados por décadas de neoliberalismo, primarización y endeudamiento. Se acentuó la asfixia financiera, el desbalance comercial, la regresión productiva y la contracción del poder adquisitivo. Esos ahogos sólo comenzarán a resolverse con otro modelo y otra política.

Crisis en las cúpulas conservadoras

La pandemia ha sido utilizada por los gobiernos derechistas para militarizar sus gestiones. En Colombia, Perú, Chile y Ecuador se instauraron estados de excepción con creciente protagonismo de las fuerzas armadas. La represión incluyó formas virulentas de violencia estatal. El asesinato perpetrado por los carabineros en Chile de un joven malabarista y la masacre de niñas en Paraguay son los ejemplos recientes de ese salvajismo. Todas las semanas se conoce el nombre de algún militante social colombiano ultimado por las fuerzas paramilitares.

Los gobiernos de la restauración conservadora están empeñados en instaurar regímenes autoritarios. No promueven las tiranías militares explícitas de los años 70, sino formas disfrazadas de dictadura civil. Esa nueva variedad de golpismo institucional cuenta con un alto nivel de coordinación regional.

En el campo derechista persiste la división entre corrientes extremistas y moderadas, pero ambos grupos unifican fuerzas en los momentos decisivos. Propician una estrategia común de proscripción de los principales dirigentes del progresismo.

La derecha utiliza los dispositivos del lawfare para inhabilitar opositores y capturar gobiernos. Obstruyó las candidaturas de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia para extender el mecanismo instaurado con la proscripción Lula. Combina golpes parlamentarios, judiciales y mediáticos para suprimir adversarios, en operativos que intentaron invalidar el mandato de AMLO en México o Cristina en Argentina[5].

El fraude opera como complemento de esa proscripción. Se implementa en Centroamérica, falló en Bolivia y fue imaginado en Chile para manipular la Constitución. Con mecanismos equivalentes se consumaron en Perú numerosos recambios, frente a cada desmadre del sistema político.

Esos avasallamientos cuentan con el soporte explícito de las fuerzas armadas. En Bolivia reapareció el golpe militar y en Brasil se conocieron los detalles de la asonada que preparaba la cúpula castrense, si Lula participaba en la carrera presidencial.

En ese país se verificó también la participación golpista de la casta judicial y los medios hegemónicos. El comportamiento del juez Moro fue tan descarado como las mentiras divulgadas por la red O Globo. Los principales comunicadores han asumido

en toda la región una inédita primacía en la fijación de la agenda de las clases dominantes.

También la embajada de Estados Unidos mantiene su tradicional preeminencia en el armado de las conspiraciones. Apuntalaron directamente el golpe Bolivia y actualmente maniobran en Ecuador para colocar a su candidato en la presidencia.

La derecha ha resucitando, además, discursos primitivos y campañas delirantes contra el comunismo. Alerta contra fantasiosos complots de China y denuncia ocultos propósitos de socialismo en reconocidas figuras del establishment.

La ideología conservadora cuenta con el importante sostén de los evangélicos, que se expandieron confrontando con las variantes contestatarias del cristianismo (teología de la liberación). Se afianzaron en campañas de oposición al aborto incorporando todos los mitos del neoliberalismo. Apadrinan presidentes, ministros y legisladores y han conquistado una gran influencia sustituyendo al estado en el amparo de los desprotegidos[6].

Pero el proyecto de restauración conservadora que sucedió al ciclo progresista se encuentra afectado por la erosión de sus principales figuras. Piñera gestiona en soledad, Añez elude los tribunales, Uribe pasó varias semanas en prisión domiciliaria y Lenin Moreno prepara las valijas. La misma desventura atraviesa Guaidó -que se quedó sin cómplices- o Macri, que fantasea en soledad con un inverosímil retorno.

Las derrotas sufridas por la derecha en la última secuencia de comicios (Argentina, México, Brasil, Chile, Bolivia) corroboran las adversidades de ese sector. En Ecuador Lasso perdió recientemente la mitad de los sufragios reunidos en la votación precedente.

Pero esta crisis de la derecha no es sinónimo de ocaso del neoliberalismo. Ese modelo persiste con ensayos más devastadores. Sus gestores propician la “doctrina del shock” para instrumentar en la pos-pandemia nuevas políticas de privatización, apertura comercial y desregulación laboral. La experiencia del 2009 confirma que el neoliberalismo no desaparecerá por la simple presencia de la crisis o por la creciente regulación del estado. Su remoción requiere la movilización popular.

En un lapso previsible la continuidad de la restauración conservadora está sujeta a la suerte de sus dos principales exponentes. En Colombia, Duque afronta un conflicto con Uribe que ha socavado la homogeneidad del bloque derechista, en un contexto de resurgimiento de la lucha social y consolidación de la figura alternativa de Petro.

En Brasil el destino de Bolsonaro suscita pronósticos dispares. Algunos analistas resaltan su persistente comando del sistema político. Señalan que conserva el manejo del Congreso y usufructúa de un giro asistencialista para captar empobrecidos con mayor gasto público.

La otra biblioteca resalta la arrolladora derrota de los candidatos ultra-derechistas en las recientes elecciones provinciales. Destaca la indignación imperante frente al manejo de la pandemia y observa cómo el establishment prepara un sustituto centro-derechista. En cualquier caso, el nivel de intervención popular será determinante de ese futuro.

Continuidades y replanteos de Biden

La derrota de Trump introduce otra adversidad para la derecha regional. Han sido eyectados del Departamento de Estado los personajes cavernícolas (Pompeo, Abrams) que manejaron las últimas conspiraciones en América Latina.

Bolsonaro se quedó sin referente, Duque entreteje nuevos soportes y el Grupo de Lima navega a la deriva. Ya no será sencillo repetir el desprecio imperial hacia la región, con provocaciones contra los inmigrantes o desconocimientos de compromisos en la gestión de organismos compartidos (BID).

También el asalto que propició Trump al Capitolio afecta a los derechistas latinoamericanos. Pulverizó los argumentos utilizados por Washington para intervenir en la región y socavó la autoridad del Departamento de Estado para sostener el lawfare. El escandaloso proceso electoral que vivió Estados Unidos obstruye, además, la impugnación de comicios en los países hostilizados. Los cuestionamientos a las

elecciones en Venezuela contrastan ahora con el silencio de la OEA, frente a la ocupación fascista del Congreso estadounidense.

Biden intentará remontar estos obstáculos mediante una política de dominación con buenos modales. Archivará los exabruptos de su antecesor para rearmar las alianzas con el establishment latinoamericano. Sus antecedentes despejan cualquier duda sobre su política externa. Apoyó a Thatcher en la Guerra de Malvinas, sostuvo los crímenes del Plan Colombia y apañó las operaciones de la DEA en Centroamérica.

Durante la campaña electoral difundió los mismos slogans de Trump para congraciarse con los reaccionarios de Miami. Ya anticipó que reconocerá la presidencia fantasmal de Guaidó en Venezuela y no anunció cuando derogará la tipificación de Cuba como estado terrorista.

Biden buscará artilugios para reducir la presencia de China en América Latina. Tanteará socios regionales para las multinacionales estadounidenses, que trasladan fábricas desde Asia hacia localidades próximas al mercado norteamericano. Intentará, además, formas de coordinación hemisférica para los nuevos negocios que augura la digitalización del trabajo.

El mito que a Estados Unidos no le interesa América Latina fue desmentido por la propia gestión de Trump. El magnate propició 180 cumbres de negocios y 160 acuerdos y comerciales con grandes grupos capitalistas de la zona. Tanto los Republicanos como los Demócratas aspiran a retomar el predominio de Washington sobre el continente, como antesala de su añorada reconquista de la primacía mundial. Ese objetivo exige ante todo contener la arrolladora presencia de China en la región.

Pero Biden carga con el fracaso de su antecesor en ese objetivo. El gigante asiático consolidó sus inversiones y exportaciones en todos los países, sin que Estados Unidos pudiera frenar esa avalancha. Hasta Bolsonaro -que al principio insinuó un enfriamiento de las relaciones con la nueva potencia- debió dar marcha atrás, bajo la presión de los exportadores brasileños.

Ni siquiera la suscripción del nuevo tratado de libre comercio con México (T-MEC) ha neutralizado la presencia china. Las compañías asiáticas siguen concertando acuerdos en Centroamérica y el litio es la nueva actividad en disputa, en Bolivia, Chile y Argentina. Allí se probará si Biden puede revertir las persistentes adversidades de las empresas estadounidenses. Pero todos los negocios que imagina Washington dependerán del contexto político prevaleciente.

#### Desafíos callejeros

La principal amenaza que afronta la restauración conservadora es la renovada oleada de movilizaciones populares. El arrollador triunfo del MAS en Bolivia fue un resultado directo de esa intervención. Las enormes protestas que irrumpieron en ese país tuvieron un correlato directo en las urnas.

El ejército no se atrevió a reprimir los masivos bloqueos de rutas, que impusieron la realización de comicios e impidieron la consumación de un nuevo golpe. La dictadura quedó fagocitada por su desastrosa gestión de la pandemia y por el festival de corrupción que enfureció a la clase media.

El MAS volvió a exhibir una gran capacidad para articular la acción directa con la intervención electoral. Una nueva generación de dirigentes accede ahora a la conducción del gobierno, en el clima de euforia que rodeó al regreso de Evo.

También en Chile la victoria alcanzada en la consulta sobre la Constitución fue un efecto de movilizaciones ininterrumpidas. La pandemia no disuadió la presencia de una nueva camada de militantes en las calles. Pusieron el cuerpo con decenas de muertos y centenares de mutilados, frente a gendarmes que disparaban a los ojos y lanzaban manifestantes al río.

Chile se apresta a enterrar ahora la herencia del pinochetismo y podría coronar la prolongada lucha que iniciaron los pingüinos (2006), continuaron los estudiantes (2011) y afianzaron distintos sectores de la población (2019-2020). Ha quedado abierto el camino para avanzar hacia una Constituyente soberana y democrática, que

sepulte el nefasto régimen de desigualdad, educación privada y endeudamiento familiar.

En Perú el estallido reciente fue más sorpresivo y espontáneo. Canalizó el descontento popular acumulado contra el régimen, que desde 1992 aseguró la continuidad del neoliberalismo mediante la rotación de presidentes desplazados por el Congreso.

Los jóvenes convocados por las redes sociales protagonizaron una sublevación contra los fujimoristas, liberales y apristas que han disputado la torta de los desfalcos. Esa descarnada codicia empujó a cinco presidentes a la cárcel y a uno al suicidio.

Durante varios días se vivió en Perú un escenario parecido al 2001 de Argentina. La caída de un mandatario impostor fue precipitada por el asesinato de dos estudiantes y han quedado abiertas las rendijas para bregar por una Asamblea Constituyente.

En Ecuador se ha corroborado el protagonismo de diversos sujetos populares en las revueltas. El movimiento indigenista tuvo una descollante intervención en el levantamiento que dobló a Lenin Moreno (octubre del 2019). Encabezó primero las resistencias locales contra el aumento del combustible y comandó luego la marcha sobre la capital que impuso la anulación del tarifazo.

Esa victoria rememoró tres antecedentes de presidentes tumbados por la intervención del movimiento indígena (1997, 2000 y 2005). En la última sublevación impusieron la derogación de un decreto redactado por el FMI, luego de ocupar las oficinas de ese organismo. Los éxitos obtenidos en las barricadas se plasmaron en un evento político que sintetizó las principales demandas de las organizaciones populares.

La misma tendencia a la irrupción callejera se ha verificado también en Guatemala, en las grandes protestas contra el recorte de partidas sociales del presupuesto. Esos reclamos ganaron centralidad en un país desgarrado por el terrorismo de estado.

En Haití se desenvuelve otra incansable batalla desde el 2018. Las multitudinarias movilizaciones han reunido un quinto de la población con exigencias de inmediato desplazamiento del gobierno. El presidente Moisés ha establecido un régimen de facto extendiendo la vigencia de su mandato. Anuló el Parlamento, desconoció el poder judicial y se sostiene en los militares extranjeros que ocupan el país.

Ha incentivado, además, un bandidaje criminal para aterrorizar a los opositores y doblar la lucha callejera. Estados Unidos, Francia y Canadá actúan con prepotencia colonial para mantener a su títere, en una crisis que no es eterna, ni irresoluble. Es consecuencia de la reiterada intervención imperialista en un país devastado por la casta gobernante.

En distintos rincones del hemisferio se verifica, por lo tanto, la misma tendencia al reinicio de las rebeliones que convulsionaron a Latinoamérica a principio del milenio. La derecha no encuentra instrumentos para lidiar con ese desafío.

Progresismo moderado

Las últimas rondas de comicios presidenciales no zanjaron la primacía entre la restauración conservadora y los gobiernos de centroizquierda. Hubo victorias derechistas en Uruguay y el Salvador y triunfos de signo inverso en México y Argentina. En Bolivia prevaleció esta segunda tendencia y se avecina un desenlace en Ecuador.

Durante el año en curso estarán en juego los gobiernos de Perú, Chile, Nicaragua y Honduras y se dirimirán elecciones legislativas en El Salvador, México y Argentina. Los cómputos finales clarificarán cuáles son las posibilidades de reinicio del ciclo progresista. El establishment transmite serias preocupaciones por esa eventualidad y la consiguiente rehabilitación del eje geopolítico forjado en la década pasada en torno a UNASUR[7].

Pero la moderación es el rasgo preeminente en las nuevas figuras del progresismo. Esa impronta es muy notoria en Fernández, López Obrador, Arce y Arauz y se verifica en los dos gobiernos representativos de la nueva tendencia: Argentina y México.

El presidente del primer país esperaba revertir el desolador legado de Macri, con tenues mejoras compatibles con los privilegios de los poderosos. Afrontó la desgracia

del coronavirus en un marco de furibunda agresión de la derecha y optó por el vaivén y la indefinición.

La oposición conservadora frenó su proyecto de expropiar una gran empresa quebrada (Vicentin) e impuso concesiones a los financistas mediante la presión cambiaria. Fernández violó, además, su promesa electoral con una fórmula de ajuste de las jubilaciones que reduce la incidencia de la inflación. Pero ha resistido las exigencias de devaluación e introdujo un impuesto a las grandes fortunas que sienta las bases para una reforma fiscal progresiva.

El gobierno argentino no implementa el ajuste que reclaman los acaudalados, ni la redistribución que demandan los sectores populares. Intenta transitar por un camino intermedio. Por un lado implementó desalojos de familias sin techo y por otra parte facilitó la aprobación del aborto. En la política exterior condena y sostiene (según la ocasión) al gobierno venezolano y toma distancia de la OEA, mientras afianza los vínculos con Israel.

Alberto Fernández se ubica en el cuadrante moderado del progresismo, sin definir qué tipo de peronismo prevalecerá en su gestión. A lo largo de 70 años el justicialismo ha incluido múltiples y contradictorias variantes de nacionalismo con reformas sociales, virulencia derechista, virajes neoliberales y rumbos reformistas.

El perfil actual quedará signado por la reacción del gobierno frente a una oposición que buscó instalar el caos, para judicializar (y paralizar) el sistema político. También el nivel de movilizaciones populares incidirá sobre el rumbo del oficialismo.

En México se localiza el segundo referente de este tipo de progresismo tardío. AMLO surgió de una dura confrontación con las castas del PRI y del PAN, que durante varias décadas contaron con el sostén de los principales grupos económicos. Aprovechó la división de esa elite -y la imposibilidad de repetir los tradicionales mecanismos del fraude- para llegar a la presidencia.

López Obrador presenta como logros, ciertas iniciativas democratizadoras en la investigación de la masacre de Ayotzinapa (43 estudiantes asesinados por narcocriminales), la suspensión de la construcción de cuestionados aeropuertos y la cancelación de una reforma que potenciaba la privatización de la educación pública. También resalta su estrategia de grandes obras de infraestructura, para recuperar la soberanía energética socavada por la importación de gasolina desde Estados Unidos. Pero en los hechos han primado las decisiones regresivas para reforzar el acuerdo comercial suscripto con Trump (T-MEC). Mantiene el objetado proyecto de un Tren Maya y aceptó la activa intervención del ejército para frenar el flujo de inmigrantes hacia el Norte. Ese protagonismo militar incluyó la creación de una nueva Guardia Nacional para lidiar con el flagelo de la violencia. Aunque logró aligerar la tasa de homicidios, continúa sobrepasado por una violencia criminal que cegó la vida de 260.000 personas[8].

López Obrador comparte la ambivalencia de la política exterior argentina. Se distanció del Grupo de Lima, convalida la soberanía de Venezuela y recibe a los médicos cubanos que batallan contra la covid-19. Pero al mismo tiempo realizó una entusiasta visita a Trump para ratificar el tratado de libre comercio.

La gestión de AMLO es muy representativa de la tibieza que signa a la segunda ola del progresismo. En esa timidez para encarar transformaciones de cierta significación supera a su colega de Argentina. Aunque corresponde situarlo en el universo del progresismo actúa con gran lejanía del cardenismo, en un contexto de signado por el debilitamiento de la clase trabajadora y el distanciamiento del legado antiimperialista.

Progresismo radical

Hay dos gobiernos en la región que provienen de vertientes radicales diferenciadas del progresismo convencional. Evo y Chávez forjaron modelos convergentes, pero al mismo tiempo distantes de Kirchner o Lula. ¿En qué medida sus sucesores Arce y Maduro mantienen esa impronta?

En Bolivia el interrogante comenzará a dilucidarse cuando se clarifiquen los nuevos liderazgos dentro del MAS. En el debut de Arce han sido impactantes las iniciativas

anti-Lawfare. Ya empezaron los juicios contra los responsables de las masacres perpetradas por los golpistas, pero no se sabe aún si habrá una depuración efectiva del ejército.

La principal duda gira en torno al rumbo económico. ¿Podrá el oficialismo retomar los logros de la administración precedente? Durante la presidencia de Evo se implementó un modelo de expansión productiva con redistribución del ingreso, que colocó al país en un tope de crecimiento con mejoras sociales. El secreto de esos resultados fue la estatización de los recursos naturales, en un marco de estabilidad macroeconómica y coexistencia con sectores privados e informales.

El manejo estatal directo de las empresas estratégicas fue decisivo para la captura de la renta generada por los sectores de alta rentabilidad. El Estado absorbió y recicló el 80% de ese excedente e impuso a los bancos la obligatoriedad de orientar el 60% de sus inversiones hacia las actividades productivas.

Con esa regulación se logró la desdolarización, el aumento del consumo y la multiplicación de la inversión. La pobreza extrema disminuyó del 38,2% (2005) al 15,2% (2018) y el PBI per cápita se incrementó de 1037 a 3390 dólares. Los ingresos de los sectores medios repuntaron junto a la ampliación del poder adquisitivo, en un esquema asentado en la nacionalización del petróleo[9].

Habrá que si este modelo recobra vitalidad en el nuevo contexto internacional y si la gran rémora de subdesarrollo que caracteriza a Bolivia facilita esa expansión. Las primeras medidas del gobierno incluyeron un gravamen anual a las grandes fortunas y proyectos para efectivizar la industrialización local de litio, mediante acuerdos con empresas foráneas. Los golpistas habían interrumpido ese plan para consumir la simple depredación de los recursos naturales. Pero el sendero general que adoptará Arce aún no parece definido.

Luces y sombras

Al igual que en Bolivia la derecha sufrió en Venezuela una significativa derrota. Los golpistas que durante un año arrebataron el gobierno del Altiplano, no consiguieron doblegar en ningún momento al chavismo. El proceso bolivariano desbarató todas las conspiraciones gestadas por Washington.

Las diferencias entre esas dos experiencias del mismo signo son numerosas. En Venezuela la clase dominante rechazó todos los intentos de conciliación o mínima coordinación con el gobierno. Saboteó las iniciativas del oficialismo siguiendo el guión de hostilidad diseñado por la embajada estadounidense.

Ese clima de agresión permanente impidió el despunte de un modelo económico semejante al forjado en Bolivia. El Departamento de Estado toleró la autonomía de ese pequeño país, pero no aceptó la pérdida de la principal reserva petrolera del hemisferio. Por eso arremetió una otra vez contra Venezuela.

Ese carácter estratégico de la confrontación imperial con el chavismo realza la derrota padecida por los escuálidos. El sostén de Washington a Guaidó está naufragando y el último intento golpista ensayado con la fuga de Leopoldo López se diluyó en el olvido. Los operativos de provocación militar persisten con nuevos reagrupamientos de paramilitares en la frontera con Colombia, pero los complots han perdido efectividad. El vergonzoso fracaso del desembarco de mercenarios yanquis en la costa afectó seriamente a los conspiradores.

La derecha tampoco pudo boicotear las elecciones de diciembre pasado. La farsa de comicios paralelos fue intrascendente y un sector de la oposición concurrió a las urnas. Con la mayoría oficialista en la nueva Asamblea Nacional, el chavismo recuperó la institución secuestrada durante varios años por los golpistas.

El fante de Guaidó conserva el aval estadounidense, pero quedó a la defensiva y está manchado por incontables escándalos de corrupción. Ha perdido capacidad de convocatoria y enfrenta los cuestionamientos de su propia camarilla.

Pero también el chavismo afronta graves problemas. Ganó la última elección con un alto porcentual de abstención. El 32 % de participación en las urnas no fue el más bajo de la secuencia bolivariana, ni tocó el piso habitual en numerosos países. Pero esa

alicaída concurrencia electoral ilustra el cansancio que impera en la población. La pérdida de un millón sufragios por parte del oficialismo se registró en un escenario de dramáticas dificultades.

El derrumbe económico es descomunal. El producto bruto se desplomó un 70% desde el 2013 bajo el impactante flagelo de la estanflación. El acoso orquestado por el imperialismo y sus socios locales desencadenó un desmoronamiento mayúsculo.

El país ha soportado el desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales, junto a un sistemático sabotaje al financiamiento de la empresa petrolera (PDVSA). Esa compañía no pudo refinanciar deudas, ni adquirir repuestos para la continuidad de la producción. La extracción de crudo ha caído a un piso sin precedentes y las reservas internacionales se desmoronaron de 20.000 (2013) a 6.000 millones de dólares (2020). La depreciación de moneda perdió todo parámetro ante alucinantes tasas de hiperinflación[10].

El evidente determinante externo de ese caos económico no explica todo lo ocurrido. El gobierno ha sido también responsable por improvisación, impotencia o complicidad. Toleró pasivamente un desmoronamiento productivo que contrastó con el enriquecimiento de la boliburguesía. Permitió la descapitalización generada por la fuga de capitales, que implicó un salto en la salida de fondos de 49.000 (2003) a 500.000 millones de dólares (2016).

El oficialismo desoyó todas las propuestas del chavismo crítico para introducir controles sobre los bancos, modificar la asignación de divisas al sector privado, incentivar la producción local de alimentos e involucrar a la población en el control de los precios. Tampoco penalizó seriamente a los corruptos que sobre-facturan importaciones, transfieren divisas al exterior y lucran con la especulación cambiaria. La auditoría de la deuda -para clarificar los pagos de intereses a acreedores tributarios del imperio- fue ignorada[11].

Recientemente el alivio introducido por el uso de dólares para rehabilitar el consumo quedó interrumpido por la pandemia. La decisión posterior de implementar una ley antibloqueo -para sortear la asfixia externa con atractivos al capital privado- ha sido muy cuestionada por los economistas de izquierda. Obstruye el control de las divisas y fomenta las privatizaciones. Las razones políticas -que impidieron al chavismo forjar un modelo económico semejante a Bolivia- continúan incidiendo en el país.

Últimamente se han multiplicado los cuestionamientos de los sectores radicales del chavismo hacia la intolerancia presidencial con los críticos de izquierda. Algunos interpretan que se está perpetrando un debilitamiento de las estructuras de base, para facilitar los negocios de grupos acomodados. Proponen una inmediata rectificación y un proyecto de reconstrucción de la economía basado en las comunas y la participación popular[12].

Un logro ejemplar

Cuba persiste como el principal aliado del chavismo y conserva su rol de referente del bloque radical. A diferencia de Bolivia y Venezuela logró consumir un proyecto revolucionario, que se ha mantenido al cabo de varias décadas de adversidad, aislamiento y complots. La continuidad del proceso socialista en la isla constituye una hazaña mayúscula, que ha contribuido a la perdurabilidad de la izquierda latinoamericana. Pero el último proyecto de gestar un entramado regional radical en torno al ALBA quedó severamente afectado por la crisis de Venezuela y el vaivén de Bolivia.

En medio de las dificultades generadas por el bloqueo y las agresiones económicas de Trump, Cuba logró sostener una economía acosada por el desmoronamiento del turismo y la escasez de divisas.

El procesamiento de divergencias políticas sin vulnerar la continuidad del régimen ha contribuido a la cohesión de la población. Recientemente tuvo gran difusión internacional la aparición de expresiones de disconformidad entre sectores del arte (Movimiento de San Isidro). Este hecho corrobora que Cuba no vive ajena al mundo exterior y que las distintas corrientes del neoliberalismo, la socialdemocracia y la

izquierda hacen oír su voz por distintos canales. Ese nivel de deliberación probablemente supera en intensidad y participación el promedio latinoamericano.

En ese difícil escenario ha resultado particularmente meritorio el manejo de la pandemia y los avances de la vacuna Soberana II. Superados los ensayos clínicos ya hay previsiones de fabricación y aplicación a la población (y a los visitantes de la isla). Sería el primer país latinoamericano en producir la vacuna contra la covid, reafirmando la capacidad de inmunización desarrollada contra el meningococo. Esos éxitos coronan una larga experiencia de trabajo, en el país con mayor número de médicos por habitante de América latina.

Pero también ha sido impactante el rol de las misiones en distintos lugares. A los 30.000 sanitarios que prestaban servicios en 61 países antes de la pandemia, se añadieron 46 brigadas internacionales de lucha contra la infección. Ese "ejército de batas blancas" ha sido nominado por muchas personalidades para el próximo Premio Nobel de la Paz[13].

La izquierda frente al PT y el peronismo

¿Cómo avanzar en proyectos de emancipación e igualdad en un escenario político dominado por la contraposición entre el progresismo y la derecha? Ese interrogante ordena los debates entre las corrientes reformistas, autonomistas y ortodoxas de la izquierda.

El primer sector promueve estrategias afines a la socialdemocracia tradicional. Comparte la reivindicación de objetivos humanistas, sin registrar la inviabilidad de esas metas bajo el régimen social vigente. Con esa misma omisión difunde propuestas de forjar modelos de capitalismo regulado, inclusivo y pos-liberal. Convoca a concertar iniciativas de desarrollo con los grandes bancos y empresas transnacionales, sin evaluar los fracasos de esos intentos.

Las vertientes reformistas amoldan su intervención al marco institucional imperante, minusvalorando el veto de las castas militares, judiciales y mediáticas a cualquier transformación popular significativa. Suelen desconsiderar la gravitación del golpismo y en lugar de confrontar con la derecha, exploran vías de conciliación que envalentonan al enemigo y desmoralizan a los aliados.

El PT de Brasil es el principal exponente de esa desacertada concepción, que afectó seriamente su paso al gobierno. Los avances conseguidos durante esa gestión no alcanzaron para contener la decepción popular y el ascenso de Bolsonaro. El desencanto comenzó con Lula y se generalizó con Dilma, al cabo de varios años de convalidación de los beneficios de la elite capitalista. El PT preservó la vieja estructura de privilegios de la partidocracia y aceptó la continuada primacía de los medios de comunicación hegemónicos.

Por esa aprobación del status quo el PT perdió primero el apoyo de las clases medias y luego el sostén de los trabajadores. Esa erosión se verificó durante las protestas del 2013, cuando la derecha comenzó a imponer su control de la calle. Triunfó en ese ámbito antes que en las urnas, confirmando que las relaciones de fuerza se dilucidan en el llano y se proyectan al terreno electoral.

Las corrientes reformistas suelen omitir este balance y presentan al PT como una simple víctima de los artilugios derechistas. No registran que abandonó el empoderamiento popular y apostó a un sostén pasivo de la población asentado en la mejora del consumo. Cuando el repunte económico se agotó la derecha tuvo despejado el camino para apoderarse del gobierno.

Pero esa trayectoria no define el futuro. El PT podría recuperar centralidad en la batalla contra Bolsonaro, diluirse en un frente hegemónico por sus rivales o quedar superado por un alineamiento de izquierda. Estas tres posibilidades dependerán de la intensidad de la resistencia social y del papel que asuma (o logre imponer) Lula. Las derrotas populares acumuladas durante el 2016-2018 influyen sobre un partido, que ya no es visto como el insoslayable referente de la militancia[14].

Las miradas optimistas resaltan el surgimiento de dos nuevas figuras con gran raigambre entre la juventud y los movimientos sociales (Boulos y Manuela). Han

ganado un inédito protagonismo, a partir de la alianza que dos formaciones de la izquierda (PSOL y PCdB) concertaron con el PT. Las visiones pesimistas desconsideran este acontecimiento y remarcan el retroceso frente a la derecha, en un contexto de escasa gravitación de las movilizaciones.

En cualquier caso el avance de la izquierda exige equilibrar críticas y convergencias con el PT. Por un lado resulta imprescindible discutir los errores cometidos por ese partido, para recordar que Bolsonaro no ha sido el resultado de inexorables desgracias históricas ancladas en el paternalismo y la esclavitud. Por otra parte hay que reconocer la continuada gravitación de esa organización y la probada posibilidad de construir un proyecto de izquierda preservando los puentes con el PT[15].

Los desafíos para la izquierda en el otro país que alberga una significativa variante del reformismo son más complejos. En Argentina gobierna nuevamente el kirchnerismo y a diferencia de Brasil, la oposición derechista carga con la herencia de Macri y no ha logrado consolidar la base social que acompaña a Bolsonaro. Cristina dejó, además, un recuerdo de conquistas y no un legado de decepción y el kirchnerismo recompuso sus basamentos con otro tipo de alianzas y modalidades de gestión.

Nuevamente el peronismo se ha reciclado frente al mayúsculo fracaso de sus adversarios liberales y ha sumado un segmento de los movimientos sociales, a su tradicional hegemonía en el sindicalismo. No se han corroborado los pronósticos de extinción del justicialismo, ni tampoco las expectativas de convertirlo en una fuerza radicalizada. El peronismo conserva en su estructura las franjas conservadoras que periódicamente recuperan la conducción de esa fuerza.

La naturaleza variable de ese movimiento y sus cambiantes facetas de progresismo y reacción han reaparecido, bajo un gobierno que oscila entre los atropellos y las mejoras. Comprender esa plasticidad de la principal fuerza de Argentina es un requisito insoslayable para el despunte de la izquierda. Si se desconoce esa dualidad con simples aprobaciones o miopes sectarismo resultará imposible construir un proyecto radicalizado.

Es tan equivocada la subordinación al mensaje oficial -justificando el desalojo de Guernica o el recorte de las jubilaciones- como la descalificación del logro conseguido con el impuesto a las grandes fortunas. El avance de la izquierda transita por levantar la voz contra los desaciertos del gobierno y reconocer las mejoras que introduce.

Disyuntivas del autonomismo

El autonomismo emergió con gran entusiasmo en la década pasada reivindicando la lucha de los movimientos sociales. Subrayó el alcance anti-sistémico de las protestas populares y objetó los proyectos basados en alguna estrategia de conquista del poder estatal. Con esa óptica equiparó a los gobiernos progresistas con sus pares derechistas y estimó que conformaban dos variantes de la misma dominación de los poderosos.

También propició una crítica acérrima al chavismo utilizando argumentos afines a la socialdemocracia. Cuestionó la violación de normas de funcionamiento democrático en Venezuela desconociendo el acoso estadounidense y situó al régimen de ese país, en el mismo plano que los gobiernos serviles del imperialismo. Esa actitud lo indujo a adoptar confusas posturas frente al golpe en Bolivia, que equiparaban a Evo con los golpistas y eludían la solidaridad activa con las víctimas de la asonada.

La experiencia de todo el período ha demostrado la ineffectividad de cualquier estrategia de transformación social que renuncie al manejo del estado. Ese instrumento es insoslayable para conseguir mejoras sociales, ampliar el radio de ejercicio de la democracia y permitir el protagonismo popular en un largo proceso de erradicación del capitalismo. La intervención en las elecciones constituye un momento relevante de esa batalla.

La tradicional postura autonomista de impugnación de esos comicios fue sustituida en los últimos años por miradas que aceptan la participación en esas disputas. Pero la forma en que se promueve esa intervención es tan controvertida como el

abstencionismo precedente. Las disyuntivas en curso en Ecuador ejemplifican estos problemas.

La gran novedad de esos comicios ha sido el sorprendente resultado obtenido por el indigenismo, que logró colocar a su candidato del Pachakutik -Yaku Pérez- a un paso del balotaje con el correista Arauz. Pero si se confirma que el desempate se dirimirá con el derechista Lasso, el movimiento más combativo del país afronta un serio dilema. Deberá resolver su postura en la segunda vuelta. Esa definición sólo podrá posponerse mientras se diluciden las impugnaciones a cierto número de boletas.

Yacu Pérez ha emitido varios mensajes favorables a Lasso. Lo sostuvo explícitamente en las elecciones del 2017 señalando que era “preferible un banquero a un dictador”. También lo invitó a forjar un frente en el primer recuento de votos realizado bajo el paraguas de la OEA.

Esa postura es consecuencia del durísimo conflicto que mantuvo con el gobierno de Correa, empeñado en ampliar la extracción minera. Ese choque incluyó 400 procesos judiciales contra dirigentes del indigenismo y generó una grieta tan profunda, que Pérez caracteriza a la “revolución ciudadana” en los mismos términos que el millonario neoliberal (“una década del saqueo”).

Esa animadversión se extiende también a los aliados regionales del correísmo. Pérez repudia a Chávez, Maduro y Evo Morales con el mismo lenguaje de la derecha e incluso dio a entender hace dos años su aprobación al golpe de estado en Bolivia[16]. Algunos analistas señalan que expresa la vertiente etnicista del indigenismo, que promueve demandas corporativas en estrecha conexión con las ONG. Esa corriente exhibe sintonías con la ideología neoliberal, en sus elogios a los emprendedores y a la desgravación impositiva.

Por el contrario la corriente clasista reivindica proyectos de izquierda y propicia vínculos con el sindicalismo. Registra cómo la urbanización ha impactado sobre las viejas comunidades agrarias, incrementando la incorporación de indígenas al segmento más pauperizado de las ciudades.

Este segundo alineamiento -reacio a cualquier convergencia con la derecha- podría tender puentes con los progresistas del correísmo, que objetan el brutal enfrentamiento del gobierno anterior con el indigenismo. Ese empalme de fuerzas populares es indispensable para derrotar en las urnas a Lasso y para disipar cualquier amenaza de extensión a Latinoamérica del desangre étnico-comunitario que se ha vivido en los Balcanes, Medio Oriente o África[17].

En ese contexto, varios exponentes del autonomismo celebran la aparición de Pérez, como una tercera opción que permitirá superar la política regresiva del correísmo. Mencionan las convergencias con Lasso como un episodio de escasa relevancia que se corregirá en el futuro[18]. Convergen con las voces que en Ecuador observan al líder del Pachakutik como el artífice de un nuevo rumbo, que dejará atrás la falsa antinomia entre dos pares (Arauz y Lasso)[19].

Pero de estas caracterizaciones se deduce (en el mejor de los casos) una actitud de abstención, que apuntalaría la restauración conservadora si logra frustrar la victoria de Arauz. La enceguecida confrontación con el correísmo impide registrar ese sencillo dato del escenario actual. Salta a la vista la total equivalencia de Lasso con Bolsonaro, Macri, Piñera o Duque y el sostén objetivo a ese proyecto reaccionario, si se rechaza el voto por Arauz en el próximo balotaje. No se requiere una elaboración teórica muy sofisticada para notar ese corolario.

La lucha contra el extractivismo es resaltada por los autonomistas, como otra contundente razón para colocar al correísmo y la derecha en un mismo plano. Reivindican enfáticamente la defensa de los recursos hídricos y el medio ambiente, pero sin mencionar que ese resguardo sólo será efectivo si abre caminos para el crecimiento, la industrialización y la erradicación del subdesarrollo. De lo contrario recreará el estancamiento, la pobreza y la desigualdad.

Si se convoca por ejemplo a mantener intocados bajo tierra los yacimientos mineros y petroleros (a fin de preservar el ecosistema), corresponde explicar de dónde saldrán

los recursos para viabilizar un proceso de expansión productiva con redistribución del ingreso[20].

Bolivia aporta la principal experiencia para evaluar ese dilema. Es un país muy próximo y semejante a Ecuador, los líderes del MAS introdujeron el Estado plurinacional, el respecto a las lenguas y costumbres de las comunidades y la orgullosa reivindicación de la tradición indigenista. Pero al mismo tiempo acotaron los planteos etnicistas, articularon un proyecto nacional con otros sectores populares y pusieron en práctica un modelo de crecimiento asentado en el manejo estatal de la renta gasífero-petrolera. Los avances económico-sociales logrados en esa gestión hubieron inviábiles con un proyecto meramente anti-extractivo.

Problemas del dogmatismo

Si en Ecuador se confirma el balotaje entre Arauz y Lasso, todas las vertientes de la izquierda afrontarán una conocida disyuntiva: apoyar al candidato progresista u optar por la abstención declarando son iguales. El sistema de doble vuelta ya impuso esa definición en otros países (Haddad versus Bolsonaro) o exigió considerar esa posibilidad (Fernández frente a Macri, Evo ante Mesa).

Varias corrientes provenientes de la tradición más ortodoxa de trotskismo suelen objetar el sostén de las figuras de centroizquierda frente a los conservadores. Denuncian las afinidades entre dos sectores pertenecientes al mismo segmento burgués y cuestionan la resignación frente al mal menor. Destacan también el daño que genera el apoyo al reformismo para la construcción de un proyecto revolucionario. Pero en las últimas décadas esos señalamientos no pasaron la prueba de los hechos. En ningún país la decisión de cuestionar por igual a los dos principales contendientes redundó en la gestación de fuerzas significativas de la izquierda. La experiencia demostró que el progresismo es inconsecuente en su batalla contra la derecha, pero no se asemeja al principal enemigo de los pueblos latinoamericanos. Además, la opción por el mal menor no es invariablemente negativa. En la militancia cotidiana siempre se buscan logros (sindicales, sociales o políticos) distanciados del ideal socialista.

El voto al progresismo contra la derecha simplemente contribuye a frenar la restauración conservadora. Permite limitar los atropellos económicos y contener la violencia contra los oprimidos. De esa forma se generan escenarios más favorables para el avance de la izquierda y se forjan relaciones de fuerzas más afines a ese objetivo. Esa estrategia resulta comprensible a la mayoría de la población, que nunca capta los enmarañados razonamientos expuestos para justificar la abstención.

El dilema electoral concentra los mismos problemas de intervención política, que aparecen a la hora de precisar posicionamientos frente a gobiernos ambiguos (AMLO, Fernández) o alianzas de la izquierda con el progresismo (el PSOL con el PT). Pero Venezuela es el país dónde esas disyuntivas ha suscitado controversias más acaloradas.

Allí no está en juego la simple opción electoral entre oficialistas y opositores, sino la permanente amenaza de un golpe para instaurar un régimen de terror y entrega. Ese peligro -registrado por todos los analistas- suele resultar imperceptible para quienes subrayan la tendencia del chavismo a conciliar con la derecha. Destacan esas coincidencias sin explicar por qué razón el imperialismo y vasallos continúan fomentando incontables complots. Esa postura presenta numerosas variantes[21].

Las corrientes más extremas presentan a Maduro como el enemigo principal y demandan su remoción en evidente sintonía con la derecha. Repiten el suicidio que cometió la izquierda, cuando empalmó con el gorilismo (alianzas con el antiperonismo en la Argentina en los años 50).

Otras vertientes más moderadas eluden ese alineamiento, pero optan por criticar al chavismo y a la oposición sin tomar partido en el conflicto. Convocan a la abstención en las elecciones y difunden consignas abstractas. En otros casos esa evasión del conflicto real conduce a propiciar mediaciones entre los escuálidos y el chavismo, asumiendo una implícita neutralidad frente a los victimarios y las víctimas de la

agresión imperialista. Esas conductas obstruyen la incidencia en procesos políticos reales y potencian la marginalidad.

Estrategias de radicalización

Los debates en la izquierda no sólo aportan diagnósticos del escenario latinoamericano. Intentan caracterizaciones destinadas a facilitar la intervención política para avanzar hacia el objetivo transformador. Buscan apuntalar la construcción de otra sociedad, construyendo caminos para resistir el avasallamiento imperial, erradicar el capitalismo y sentar las bases del socialismo.

Los militantes de la izquierda persiguen esa meta. Rechazan las fantasías de capitalismo productivo, inclusivo y humanista que propagan los líderes del progresismo. También cuestionan el mito de una gestión armonizadora del Estado, en una sociedad desgarrada por la desigualdad y la explotación. El logro del bien común exige apuntalar la superación del capitalismo.

Esa reafirmación de los principios es decisiva para forjar el objetivo socialista. Pero se necesitan tácticas, estrategias y proyectos adecuados a la época actual. Durante la mayor parte del siglo XX ese cuerpo de acciones estuvo centrado en la revolución, como momento culminante de los levantamientos populares.

Ese desemboque podía derivar de conquistas ascendentes, procesos de insurrección o guerras populares prolongadas. Las revoluciones triunfantes consumadas en escenarios de gran confrontación bélica o agresión imperial aportaban los antecedentes de ese desenlace. Con esos presupuestos se definían orientaciones inspiradas en las exitosas experiencias de China, Vietnam o Cuba.

Esos proyectos fueron abandonados en la mayor parte del planeta luego del colapso de Unión Soviética. Pero en América Latina esa deserción quedó acotada por la permanencia de la revolución cubana, la irrupción del ciclo progresista y el impacto de los procesos radicales de Venezuela y Bolivia. Este escenario permitió grandes cambios sin rupturas revolucionarias, bajo sistemas políticos más complejos que las clásicas dictaduras de los años 60-70.

En este marco han madurado nuevas estrategias de radicalización que valoran los logros de los gobiernos progresistas, sin aceptar los límites que imponen a la acción popular. Esas políticas anticapitalistas no definen con antelación el rumbo que adoptará la batalla por una nueva sociedad. Evitan esa predeterminación de temporalidades o secuencias de una transformación imprevisible. Propician que la experiencia dilucide cuáles son las conquistas que precederán el logro de la meta socialista.

Esos avances emergerán de acciones parlamentarias y batallas callejeras, pero no es posible presagiar qué tipo de combinación enlazará a ambos procesos. La mejor forma de integrar ambas dimensiones transita por la construcción de hegemonías políticas gramscianas y la preparación de acciones revolucionarias leninistas.

Ese tipo de política tiene numerosos exponentes en corrientes, partidos y movimientos de América Latina. Todos subrayan la prioridad de la resistencia antiimperialista frente a las agresiones estadounidenses. Destacan que para recuperar soberanía y concebir proyectos alternativos hay que forjar un bloque de contención del imperialismo. Ese entramado permitiría, además, encarar negociaciones económicas conjuntas con potencias extra-regionales como China, para mejorar el intercambio y revertir la primarización.

La izquierda se construye en América Latina en las luchas cotidianas que rechazan el ajuste y propician la redistribución del ingreso. En la coyuntura actual esa acción supone un replanteo de la sofocante carga de la deuda externa. Hay muchas propuestas de condonaciones y quitas, pero la auditoría y la suspensión de pagos persisten como las opciones más adecuadas para implementar esa revisión. La misma centralidad presenta el impuesto a las grandes fortunas, para contrarrestar el descalabro de los ingresos fiscales con criterios de equidad.

La izquierda necesita caracterizaciones y programas, pero ningún escrito resolverá los enigmas de la experiencia militante. La voluntad de lucha es el principal ingrediente de

esa intervención, en abierta contraposición con el escepticismo y la resignación. Los incontables ejemplos de esa cualidad entre la juventud actual auguran prometedores momentos para toda la región.

(Fuente: Claudio Katz Viento Sur)

## **DONDE DIJE DIGO, DIGO DEUDA**

En los últimos años, la economía dominante ha venido imponiendo algunos dogmas que no tenían la más mínima evidencia empírica tras ellos pero que, eso sí, permitían justificar políticas económicas que han producido la concentración del ingreso y la riqueza quizá más grande de la historia.

La mejor prueba de su falsedad la proporcionan sus propios defensores que no han dudado en saltárselos a la torera cuando les ha interesado hacer lo contrario de lo que pregonaban para defender los intereses del gran poder económico.

Los economistas y políticos neoliberales han asegurado en las últimas décadas que todo incremento del déficit público era negativo y perjudicial para la economía. Incluso elaboraron una teoría, la llamada del crowding out, que sostenía que había que evitarlo porque la inversión pública expulsa a la privada, frenando así la generación de actividad y el crecimiento económico. Una teoría, como tantas otras neoliberales, que sólo se ha podido comprobar que sea cierta si se dan circunstancias muy concretas y puntuales, pero nunca con la generalidad suficiente como para poder afirmar que es una auténtica teoría o proposición científica.

Lo curioso del caso, como decía, es que sus propios defensores han dejado de lado esa supuesta verdad para defender que los déficits públicos son necesarios si lo se trataba de salvar sus intereses. El primero en demostrar esa doble moral fue Ronald Reagan que gobernaba diciendo que había que reducir al Estado a la mínima expresión pero que terminó su mandato con un déficit público récord. Se decía entonces que practicaba keynesianismo reaccionario porque, en realidad, no había renunciado a la intervención y al gasto público sino que los había dedicado a incrementar el armamentismo y las ayudas a grandes empresas reduciendo al mismo tiempo los impuestos a éstas últimas y a las grandes fortunas.

Eso mismo hicieron más tarde otros muchos gobiernos que se llamaban liberales. Por ejemplo, cuando estalló la crisis de las hipotecas basura o en los últimos meses, cuando los economistas liberales, las grandes empresas, los organismos internacionales más ortodoxos y los financieros, vuelven a reclamar que los gobiernos gasten lo que haga falta sin importar el nivel que pueda alcanzar la deuda pública o privada.

Ahora, mientras que casi todos los informes coinciden en que la Covid-19 producirá el mayor incremento de deuda pública de la historia, quienes han estado diciendo que incluso sus ligeros incrementos eran fatales no solo no ponen límites a su crecimiento sino que reclaman que no se detenga para salvar a las economías.

Otro de los mitos a los que se le da la vuelta cuando interesa es el que afirma que la creación de dinero por los bancos centrales siempre produce subida de precios, por lo que hay que evitar que los bancos centrales financien a los gobiernos. Un verdadero mito porque los datos no pueden ser más elocuentes: eso solo ocurriría si el dinero que crean va a los bancos comerciales, si estos los prestan, si quienes lo reciben los gastan en su totalidad y si cuando van a gastarlo no hay oferta suficiente de bienes y servicios. Una serie de circunstancias que la experiencia demuestra que no se da necesariamente. Tanto en la crisis de 2007-2008 como en la actual, hemos podido comprobar que el incremento espectacular del dinero creado por los bancos centrales (en seis meses de 2008 la Reserva Federal creó tanto como en los últimos sesenta años) no sólo no aumentó los precios sino que éstos incluso han disminuido en algún momento.

En realidad, los neoliberales establecieron el principio (falso) de que los bancos centrales no deben financiar a los gobiernos diciendo que eso genera inflación para dificultar así la financiación del gasto público del bienestar social, pero justifican que lo hagan, incluso en magnitudes muchísimo más elevadas como ahora, porque les interesa que el gasto público se dedique a salvar a los bancos y a las grandes empresas y fortunas.

La teoría económica de los neoliberales es de quita y pon, como un metro de goma que permitiera medir siempre la distancia que a uno le convenga. Una misma acción del gobierno se rechaza como negativa si ayuda a los débiles y se defiende como imprescindible si beneficia a los más ricos y poderosos.

Lo cierto es que, tanto el incremento desorbitado del gasto público que ahora se reclama y justifica como la intervención masiva de los bancos centrales, tienen efectos muy negativos y costes muy grandes por la forma en que se financia y realiza: aumentando la deuda sin tomar medidas para que esta sea sostenible y para que sus costes futuros se repartan con equidad. Algo que es normal porque la historia muestra que los ricos, a diferencia de los más pobres, son quienes nunca pagan por completo sus deudas o quienes siempre disfrutan de mejores condiciones para hacerlo.

El incremento del gasto público en estos momentos de pandemia es obligado (como en realidad también lo es para financiar la vida y el bienestar de los seres humanos en su totalidad) y, en consecuencia, es inevitable y necesario que aumente la deuda. Y no sólo la pública sino también la de muchas empresas que entran en una especie de paréntesis por el cierre o disminución de tantas actividades. Pero una cosa es que eso sea inevitable y otra que el incremento de la deuda se genere de la forma en que se está generando, como un negocio más de la banca, de los grandes fondos de inversión y empresas y de las mayores fortunas del mundo. La financiación necesaria para salvar la vida de las personas y el patrimonio y la actividad de millones de empresas no puede seguir siendo la fuente inagotable de enriquecimiento de quienes ya lo tienen caso todo.

Los datos son elocuentes: la deuda mundial es casi 2,8 veces mayor que la cantidad de dinero que hay en el mundo, materialmente impagable por tanto. Y el 65% de los 9,86 billones de euros que aumentó la deuda pública en la eurozona de 1995 a 2019 corresponden a intereses bancarios. Una sinrazón a la que hay que poner fin.

Los neoliberales que ahora defienden que el aumento de la deuda es imprescindible y que no debemos preocuparnos porque se produzca para salvar a las economías están volviendo a engañar a la gente. Tal y como se está generando esa deuda y en las condiciones que (como siempre) van a imponer para pagarla lo que se está creando es un nuevo yugo, una mayor esclavitud que imposibilitará el progreso económico y la vida decente de los pueblos. Es la hora de someter la deuda a juicio, de acabar con ella como un negocio, de estructurarla a lo largo del tiempo para que no sea una hipoteca paralizante para los más pobres y de poner a cero la que ha sido el resultado de los privilegios, del robo y de la injusticia.

La crisis económica que produce una emergencia sanitaria se combate poniendo dinero sobre la mesa pero si no se quiere morir de la que produce la avaricia sin límite hay que evitar que el negocio de la deuda nos envenene a todos. Nunca como ahora ha sido tan cierto lo que escribía Thomas Piketty en El capital del siglo XXI: «Una deuda es normalmente una promesa corrompida por las matemáticas y la violencia (...) Nada es más importante en estos momentos que hacer borrón y cuenta nueva, romper con la moralidad tradicional y volver a empezar». 22 enero, 2021

(Fuente: Por Juan Torres López. Other News)

## **CARTA DE PEDRO CASALDALIGA A FIDEL CASTRO**

En la década de 1980, Pedro Casaldáliga visitó Cuba y se encontró con el invicto Comandante. Después de esa visita afirmó:

Soy testigo de los logros que el pueblo cubano ha alcanzado en la salud, en la educación, en la producción. Hemos de abrir el corazón y el Evangelio a esa isla admirable.

FIDEL: Una vez más recibo invitación de Cuba y una vez más he de contentarme con enviar un mensaje. De corazón, eso sí. Hoy te lo dirijo a ti, personalmente y tuteándote, para quitarle hasta el menor atisbo de ceremonia. Como corresponde a compañeros de luchas y de esperanzas.

Espero no escandalizar demasiado ni a la derecha ni a la izquierda. Estos días has sido noticia mayor, también en Brasil. Con titulares como éste: «Un ateo en el Vaticano».

Y de eso quería hablarte, a ti y a todos los compañeros y compañeras que están ahí en esta hora histórica de tus 70 años, del proceso cubano y de la macrodictadura neoliberal.

Recuerdo, todavía con emoción, la carta que te entregamos, en 1985, Betto, los hermanos Boff y yo, escrita para ti por el patriarca de la Solidaridad y los Derechos Humanos, el cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo de São Paulo. «Aunque Vd. Se declare increyente -te decía él- yo le pido que rece por mí...».

Fidel, a estas alturas de tu vida y la mía y de la marcha de nuestros pueblos y de las iglesias más comprometidas con el Evangelio hecho vida e historia, tú y yo podemos muy bien ser al mismo tiempo creyentes y ateos.

Ateos del dios del colonialismo y del imperialismo, del capital ególatra y de la exclusión y el hambre y la muerte para las mayorías, con un mundo dividido mortalmente en dos. Y creyentes, por otra parte, del Dios de la Vida y la Fraternidad universal, con un mundo humano único, en la Dignidad respetada por igual de todas las personas y de todos los pueblos.

Con esta fe, abrazo a todo el pueblo de Martí, en la esperanza de su victoria sobre el bloqueo inicuo, en la defensa de sus conquistas sociales y en la consolidación de una democracia sin privilegiados y sin excluidos, con Pan y con Espíritu, con Justicia y con Libertad; en la hermosa patria de la Isla y en toda la Patria Grande de Nuestra América. No te doy la bendición porque tengo dos años menos que tú y es a los mayores a quienes corresponde bendecir...

Te abrazo, como compañero de camino.

Pedro Casaldáliga, obispo. São Félix do Araguaia, 10 de diciembre de 1996

## **BRASIL**

### **AL BORDE DEL COLAPSO SANITARIO, BRASIL SE TRANSFORMA EN UN RIESGO GLOBAL**

Brasil se convirtió en una “cámara de gas a cielo abierto”, con mutaciones del coronavirus que ponen en riesgo el mundo, dice el manifiesto de intelectuales, religiosos y artistas “horrorizados” ante la mortandad agrandada por el gobierno.

El monstruoso gobierno genocida de (Jair) Bolsonaro dejó de ser una amenaza solo a Brasil para hacerse una amenaza global”, dice la Carta Abierta a la Humanidad divulgada el 6 de marzo, que atrajo miles de adhesiones. “Brasil grita por socorro” encabeza el texto.

Decenas de enfermos de covid-19 muriendo en las filas de espera ante las Unidades de Tratamiento Intensivo (UTI) sin cupo, contenedores refrigerados para cadáveres sin espacio en los cementerios y gobiernos locales pidiendo ayuda a otros reflejan el colapso sanitario que ya afecta algunos de los estados brasileños y acecha otros.

En Santa Catarina, un estado sureño de 7,2 millones de habitantes, casi 400 enfermos esperaban UTI el 6 de marzo y en esa situación ya habían muerto por lo menos 61. Cuatro pacientes lograron trasladarse a hospitales de Espírito Santo, estado del sureste de Brasil. Sus capitales, Florianópolis y Vitoria, distan 1160 kilómetros.

El secretario de Salud de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, reconoció el colapso de los hospitales de ese estado y solicitó a sus colegas acoger parte de sus 59 pacientes necesitados de cuidados intensivos.

El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general del Ejército, anunció el 25 de febrero que la transferencia de enfermos graves a otros estados sería la respuesta al agotamiento de recursos en algunas localidades deficitarias de otros.

Así se hizo con más de 600 enfermos del estado de Amazonas, en el noreste del país, donde colapsaron los hospitales por falta de oxígeno, después de morir centenares de personas por asfixia a partir del 14 de enero.

Pero ahora casi todos los 26 estados brasileños y el Distrito Federal tienen sus hospitales con ocupación crítica, especialmente las UTI destinadas a la covid-19, y ya no pueden prestar esa solidaridad, contestaron autoridades sanitarias locales y regionales al ministro.

La incapacidad del ministro de informarse y de planificar las acciones nacionales contra la pandemia es una de las brechas que ponen los brasileños a la merced del coronavirus.

El general alega no haber tenido información previa de la carencia de oxígeno en el Amazonas, en respuesta a las investigaciones de la Justicia y del Tribunal de Cuentas del poder legislativo sobre su posible omisión en la tragedia amazónica de enero. Pero documentos de su propio ministerio y su propia presencia en Manaus, capital del Amazonas, algunos días antes del colapso desmienten sus alegaciones.

En relación a la lentitud de la vacunación en Brasil, por falta de vacunas que su gobierno se negó a contratar con la antelación recomendable, Pazuello anuncia sucesivas metas cuya irrealidad es evidente, ante la fuerte presión de la sociedad y los gobiernos de estados y municipios.

Su plan preveía, por ejemplo, 46 millones de dosis este mes de marzo para un país con 212 millones de habitantes. La cifra se redujo tres veces y se limita ahora a 30 millones, pero sin credibilidad. Incluir vacunas aún sin contratos de compra o sin aprobación de la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria es uno de sus trucos simplones.

La vacunación en Manaus, capital del estado de Amazonas, es la más adelantada en Brasil, con poco más de siete por ciento de la población, mientras el promedio en Brasil es de 3,88 por ciento. Se busca así contener la pandemia en esa región con la variante del coronavirus que parece más transmisible y agresiva. Foto: Marceley Gomes /Semom-Fotos Públicas

Pero el general-ministro no es el origen de la catástrofe sanitaria brasileña, sino un síntoma. Su nombramiento, en mayo, se debió al deseo del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de imponer sus orientaciones en relación a la pandemia, contrarias al aislamiento social y a favor de medicamentos ilusorios, como la cloroquina.

Los ministros anteriores, los médicos Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, destituidos en abril y mayo de 2020, respectivamente, por rechazar las imposiciones de Bolsonaro, que sabotea sistemáticamente los esfuerzos de los gobiernos locales en restringir la circulación de las personas y usar mascarillas.

Promueve aglomeraciones, critica las mascarillas, defiende la mantención de toda la actividad económica, ya que el desempleo "mata más que el virus". Todos se contagiarán un día y aceptarlo es la forma de enfrentar la covid-19 "como hombres", según el presidente.

Brasil vivió un apogeo de la covid entre fines de mayo y agosto, con cerca de 1000 muertes como promedio diario. Se ilusionó luego con una declinación hasta diciembre. Se desarmaron hospitales de campaña, se descuidó la compra de vacunas, se intensificó la promoción del llamado "tratamiento precoz", con la cloroquina y la

hidrocloroquina, usadas contra la malaria y el lupus, medicamentos contra parásitos como la ivermectina, antibióticos, anticoagulantes y vitaminas variadas, ninguno con eficacia comprobada.

La nueva ola, de propagación más rápida y aparentemente más letal, empezó por el escándalo amazónico en enero y se extendió a todo el Brasil en febrero. El promedio de muertos diarios alcanzó 1496 el 7 de marzo, 42 por ciento más que el promedio de dos semanas antes.

Los epidemiólogos apuntan las fiestas del fin del año y del carnaval, aunque restringidos o prohibidos, como el factor de los nuevos brotes.

En Amazonas, aparentemente empezando por su capital Manaus, de 2,2 millones de habitantes, surgió la variante P1 del coronavirus causador de la covid-19, que tiene una capacidad de contagio 1,4 a 2,2 veces superior a la del virus original, según un estudio.

El traslado de enfermos de Amazonas a otros 16 estados ayudó probablemente a diseminar esa variante y otras por casi todo el Brasil. Con la pandemia sin control y en propagación, el país se hizo un fértil criadero de nuevas mutaciones.

Eso hace de Brasil una doble amenaza a los demás países, especialmente los vecinos. Por expansión de la pandemia y por las variantes que pueden incluso romper la protección generada por las vacunas.

La situación brasileña es “muy seria” y preocupa por su transmisión a América Latina. Exige “medidas agresivas” y vacunación, urgió el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 5 de marzo.

Pero es difícil impulsar las medidas que la experiencia mundial comprobaron ser eficaces, sin el capitán del barco rema al revés. Los estados y municipios, a excepción de los gobernados por bolsonaristas, no logran seguir el ejemplo de los países de mayor éxito en controlar la pandemia.

Imponer el cierre de las actividades económicas y sociales que todos usen mascarillas en lugares públicos es casi imposible. Últimamente el reto es impedir fiestas y aglomeraciones clandestinas, en bares, restaurantes y locales irregulares, que probablemente aumentaron el contagio de jóvenes de las capas medias y ricas.

Bolsonaro decretó, por ejemplo, que son actividades esenciales las sesiones religiosas presenciales y los centros de gimnasia. Su secretaria de Cultura prohibió recursos de incentivo a espectáculos que no sean presenciales.

Camioneros bolsonaristas bloquearon el viernes 5 de marzo dos puntos de la principal vía de acceso a la ciudad de São Paulo, en un protesto contra medidas del gobierno local, que cierran el comercio y servicios no esenciales, ante el agravamiento de la pandemia y los hospitales saturados.

Es “intencional el colapso del sistema de salud” que provoca el presidente, al boicotear la vacunación y la prevención y estimular aglomeraciones, creando el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus (que) ponen en riesgo toda la humanidad”, acusa el manifiesto de intelectuales, religiosos y artistas, como el cantautor y escritor Chico Buarque de Holanda y el fraile Leonardo Boff.

El grupo pide al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, “urgencia en la condenación de la política genocida de este gobierno que amenaza la civilización”.

(Fuente: Other News. Mario Osava)

## COLOMBIA

### **EL EJÉRCITO COLOMBIANO ASESINÓ A 6.402 CIVILES**

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados «falsos positivos», que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes.

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. «Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz», declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado». Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número.

«La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso.»No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP», aseguró Castillo. «Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país», agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP «pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial» pese a que el tribunal de paz «tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia».

(Fuente: Guido Vassallo Página 12)

## **CUBA**

### **MEDICOS CUBANOS HAN ATENDIDO CASI A UN TERCIO DE LA HUMANIDAD**

En seis décadas los médicos cubanos han llevado a cabo en el mundo más de 14.500.000 operaciones quirúrgicas y 4.470.000 partos.

El director de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) de Cuba, Jorge Delgado Bustillo, afirmó que a lo largo de seis décadas personal médico de la mayor de Antillas ha atendido a 1.988.000.000 de personas, lo que equivale a cerca de un tercio de la humanidad.

El galeno, citado en un comunicado del Ministerio cubano de Salud, destacó que en ese periodo los profesionales de la salud de la isla caribeña han llevado a cabo más de 14.500.000 operaciones quirúrgicas, 4.470.000 partos y han salvado 8.700.000 vidas.

El director de la UCCM recordó que esta historia de hermandad con otros pueblos se remonta al año 1960, cuando una brigada marchó a la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, para auxiliar a los damnificados de un terremoto de magnitud 9.5, el sismo mayor registrado en la historia.

Delgado Bustillo dijo que en la actualidad más de 30 mil 407 profesionales de la salud de Cuba se encuentran en 66 naciones, distribuidos en brigadas médicas permanentes y otras del contingente Henry Reeve, para enfrentar la pandemia de la Covid-19.

Destacó que, por solicitud de los gobiernos, el contingente Henry Reeve llegó por primera vez a Europa, a la región italiana de Lombardía y a la ciudad de Turín, severamente afectadas por la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Asimismo, han estado en el Principado de Andorra, y en decenas de naciones de América Latina y el Caribe, África, Asia y Medio Oriente.

Se han conformado en total 56 brigadas para combatir el SARS-CoV-2, de las que se encuentran activas 25, con alrededor de 2.500 colaboradores, apuntó el funcionario.

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

## **MEXICO**

### **20 AÑOS DE LA MARCHA DEL COLOR DE LA TIERRA, QUE MARCÓ “UN ANTES Y UN DESPUÉS” EN EL ZAPATISMO.**

Han pasado 20 años de la marcha que partió en febrero de 2001 de Chiapas (México) para exigir que se reconocieran constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, marginados y maltratados por el poder durante siglos. Los zapatistas pusieron rumbo al Congreso mexicano, donde presionarían para que aprobara la Ley de cultura y derechos indígenas, la Ley Cocopa. Esta se basaba en los Acuerdos de

San Andrés, los primeros que reconocían los derechos indígenas en México, firmados entre el Gobierno federal y el EZLN. Los guerrilleros prometían dejar las armas si los acuerdos se cumplían.

Un total de 24 delegados zapatistas, comandantes de la guerrilla, viajaron desde sus diferentes lugares de origen hasta San Cristóbal de las Casas (Chiapas). Su primer discurso decía así: “El día de hoy la dignidad es quien toma, con nuestra manos, estas bandera. Hasta ahora no hay lugar en ella para nosotros, los que somos el color de la tierra. Hasta ahora hemos esperado para que los otros que bajo ella se cobijan acepten que es nuestra también la historia que la ondea. Los indígenas mexicanos somos indígenas y somos mexicanos. Queremos ser indígenas y queremos ser mexicanos”. Al día siguiente, un 25 de febrero de 2001, comenzaron su viaje.

Era una ruta de guerrilleros desarmados y en son de paz acompañados de representantes de diversos grupos étnicos: tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, zoques, chinantecos, mixes, zapotecos, mazatecos, wixarikas, yaquis, rarrámuris, seris. También viaja con ellos una delegación extranjera. “Recuerdo que los esfuerzos organizativos fueron muy grandes. La gente se iba sumando. Cada vez había más y más gente”, narra Tatiana, miembro del grupo de apoyo al EZLN en Madrid. Entonces era una militante muy joven del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), el brazo civil del movimiento. Muchos jóvenes como ella se preparaban en Ciudad de México para recibir a la caravana.

Uno de los momentos más importantes de la marcha se produjo en Nurio (Michoacán) la semana antes de que la caravana llegara a Ciudad de México. Allí, en un congreso, 40 de las 56 etnias indígenas de México dieron su apoyo al movimiento zapatista, que trascendía las fronteras de Chiapas. El subcomandante Marcos encarnaba la lucha por la dignidad de la gran mayoría de indígenas, 10 millones de personas que habían sufrido la discriminación durante siglos. A su paso por el estado de Morelos, recuerda Tatiana, la caravana también realizó una ofrenda floral a Emiliano Zapata, el revolucionario que inspiraba sus pasos.

“Llegamos. Aquí estamos”

La caravana zapatista, que había sumado a unas 300 personas, llegó a la Ciudad de México el 11 de marzo de 2001. El inmenso Zócalo, desbordado con más de un millón de personas, esperaba a ver y escuchar a los hombres y mujeres de los pasamontañas. Entre ellos había personalidades de la talla de José Saramago, Daniell Miterrand, Manuel Vázquez Montalbán y Alain Rouraine. “Creo que nunca voy a ver a tanta gente en mi vida. Había partidos de izquierdas, las bases, gente de a pie, mayores, niños pequeños con pasamontañas. Estaba abarrotado y no podías moverte”, recuerda Tatiana.

Sobre la entrada triunfal de los zapatistas, Tatiana apunta: “Hay que pensar en lo alucinante de que un Ejército rebelde sin armas tome la plaza más importante del país, la más grande de Latinoamérica”. El primero en hablar fue el subcomandante Marcos: “Llegamos. Aquí estamos”, dijo. Pero le siguieron las palabras también emocionantes de la comandanta Esther. “No descansaremos nosotras las mujeres porque nadie más vendrá por nosotras. ¡Nunca más un México sin las mujeres!”

Los zapatistas siguieron en la selva de asfalto, Ciudad de México, varios días más, alojados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Jóvenes de izquierdas del país y de todo el mundo se sumaban a aquel momento histórico. Veían en aquel movimiento popular la fuerza de la lucha organizada. Si bien los zapatistas no consiguieron su objetivo, habían mandado un mensaje que trascendía fronteras.

El 28 de marzo los zapatistas consiguieron ingresar en el Congreso mexicano, aunque el subcomandante Marcos decidió quedarse fuera. En esa histórica jornada tomaron la voz los pueblos indígenas: defendieron el proyecto de ley que daría una amplia autonomía a millones de personas. Sin embargo, todo quedó en el aire. Las autoridades mexicanas renunciaron a los tres gestos principales que pedía el movimiento: el cierre de las siete posiciones militares en Chiapas (solo se cerró una),

la liberación de los presos zapatistas y la más importante, la aprobación de la Ley Cocopa.

Un mes después, se aprobó una reforma constitucional que no atendía a los Acuerdos de San Andrés. Y fue aceptada por unanimidad en el Congreso, incluso por la izquierda (el PRD). “Fue la traición de la clase política mexicana”, considera Tatiana. Los zapatistas “deciden que nunca más se va a hacer un encuentro con los de arriba, ya que ‘el mal Gobierno’ no está dispuesto a respetar”. Ahí comenzó la renuncia al diálogo de los zapatistas con el Gobierno Federal y su apuesta por la autoorganización en sus territorios, en los “caracoles” zapatistas. Pero Tatiana subraya que eso no supuso una renuncia o repliegue de sus principios, sino que han seguido tejiendo alianzas con la sociedad civil. El movimiento zapatista, que dejó las armas en 2006, continúa y este año, además, prepara una visita histórica a España y otros lugares de Europa.

(Fuente: María F. Sánchez. Cuartopoder)

## **VENEZUELA**

### **RELATORA ESPECIAL DE LA ONU: “ESTADOS UNIDOS Y EUROPA DEBEN LEVANTAR SANCIONES A VENEZUELA”**

Este viernes 12 de febrero se conoció a través de una rueda de prensa emitida por la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Dohuan, las primeras impresiones sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales que afectan a la población y desenvolvimiento efectivo del Gobierno venezolano, las que fueron recogidas luego de la larga visita de 12 días y arrojará un informe final en septiembre de 2021. “Las observaciones son preliminares, el resultado de las consultas son exhaustivas, con una amplia gama de interlocutores”, expresó la relatora refiriéndose a este encuentro con los medios para dar a conocer algunos hechos que marcan el informe.

Este informe preliminar se apega a la realidad que vive actualmente el país después que Estados Unidos impusiera su bloque de sanciones, que iniciaron desde la presidencia del fallecido Hugo Chávez, con medidas contra ministros, ministras, empresarios y empresarias venezolanos y que se ampliaron en este gobierno del presidente Nicolás Maduro, afectando directa y significativamente a la población civil.

Los hechos desde otro contexto

En este marco se ha cercenado el derecho de la población y del Gobierno bolivariano a disponer de los recursos monetarios depositados en bancos extranjeros para la compra de alimentos y medicinas, militar, tecnológico, bloqueo a las transacciones bancarias por el sistema swift con el que Venezuela lograba realizar los pagos puntuales de las deudas, pago de nóminas de personal diplomático y otras responsabilidades en el exterior, esto es parte del juego para declarar ineficiente y en default a la Revolución bolivariana; en diversos campos de desarrollo necesarios para que un país subsista, además del cerco económico, se generó un bloqueo a las operaciones marítimas, comerciales de todo tipo, violentando no solo el Derecho Internacional, sino toda forma legal que defina la soberanía territorial y la humanidad.

Esa injerencia marcó un precedente histórico cuando Estados Unidos reconoce y se alía con el autoproclamado “presidente interino”, el diputado Juan Guaidó, en esta etapa desde 2019 hasta a salida de la presidencia de Donald Trump, en que se concretaron una serie de acciones ilícitas contra el Estado venezolano, como fue el robo de Citgo, de Monómeros, la prohibición de transacciones comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aún sabiendo la dependencia real del rentismo, así como la retención del dinero depositado en bancos en Estados Unidos, recrudescimiento de las medidas unilaterales y en otros países apropiación del oro y de

otras reservas. El resultado catastrófico de estos años prevalecerá como una de las peores crisis económicas inducidas por los carteles de la violencia política internacional de la derecha orquestada en grupos como el de Lima, en socios comerciales de Europa que responden al criterio impulsado desde el país hegemón.

a careta de Trump, acusar de supuesta “mala gestión, narcotráfico, corrupción y usurpación del poder” de un gobierno legítimo, acosado, cercado y que ha sido víctima de atentados personales con intenciones de desaparecerle, aparte de las víctimas fatales de las sanciones por no poderse cancelar los tratamientos médicos especializados en el exterior, la persecución xenofóbica contra los migrantes que la misma mediática internacional generó y que son parte de esa campaña estudiada de políticos y representantes de la extrema derecha, pero que ocultaban el verdadero trasfondo: la captación de mano de obra calificada para dejar el país sin profesionales y una aporofobia que ha creado, de igual forma, persecución, violencia de género, asesinatos y ahora ha forjado en algunos países cierre de fronteras y leyes específicas contra la migración venezolana, conclusión: el desplazamiento humano no es un derecho civil.

A diferencia del presentado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en 2019, que en una corta visita de tres días presenta 558 entrevistas de las cuales 460 de ellas fueron hechas a migrantes venezolanos que hacen vida en diferentes países, por lo tanto, la consistencia y acusaciones que realizó la Comisionada en este informe fue cuestionado no solo por representantes del Gobierno venezolano, sino por sectores internacionales por ser sesgado y con intenciones netamente políticas parciales. En esa oportunidad, una de las voces críticas fue la de Alfred de Zayas, que dijo que era “poco serio, defectuoso y decepcionante”, amén que saltaba una serie de subterfugios macabros vívidos desde el inicio de las sanciones, como la omisión de las víctimas del bloqueo, de las mal llamadas “guarimbas” (actos terroristas de los opositores contra el pueblo) y el flagelo que constituyen las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela y el robo a los recursos.

El cerco al pueblo venezolano con fines de derrocar a Nicolás Maduro quedó en evidencia una vez más en 2020, cuando le es negado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito de cinco mil millones de dólares para la lucha contra el Covid-19; el pretexto seguía siendo el mismo que implantó Estados Unidos: “usurpación del poder y que el gobierno no era reconocido por parte de la comunidad internacional”, y aquí un dato relevante pues de 194 países, a lo sumo solo 60 apoyaban la aventura antidemocrática de la verdadera usurpación en el poder de Juan Guaidó, el triste elemento usado y desechado ahora por el gobierno estadounidense de Trump, que antes de su salida de la palestra presidencial dio un zarpazo certero desconociendo el liderazgo del diputado y que fue la seguidilla en cadena por los demás gobiernos serviles de esa política injerencista.

Otro de los factores de la guerra no convencional contra Venezuela fue el contrabando de extracción tanto de gasolina como de alimentos y en especial el ataque a la moneda, actos de piratería que fueron avalados y obviados hasta la nacionalización, desde el gobierno de Álvaro Uribe, pasando por el de Juan Manuel Santos y que no ha variado en nada en esta presidencia del uribista Iván Duque. Pero Colombia también ha servido de plataforma violenta para la incursión terrorista, desde allá se gestó y se ejecutó con conocimiento de sus autoridades la llamada “Operación Gedeón”.

Agenda de la Relatora Especial

Dohuan estuvo 12 días con una agenda de trabajo para evaluar el impacto ejercido por las medidas coercitivas unilaterales, en este sentido se reunió con el alto ejecutivo gubernamental para conocer el saldo negativo que han dejado las sanciones y los logros ejecutados por encima del bloqueo, que representan un esfuerzo conjunto para no privar a la población de beneficios sociales; se reunió con las organizaciones sociales, conversó con representantes de partidos políticos opositores, empresarios y empresarias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sector médico, educativo,

Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP), Asamblea Nacional, el clérigo, víctimas e incluso con el presidente Nicolás Maduro.

Parte del recorrido también consistió en la visita a los núcleos productivos del país y centros especializados como el complejo Canaimita, un proyecto de dotación de insumos tecnológicos para la educación primaria que fue una forma para insertar a los niños y niñas en el mundo de la tecnología y que ha servido de plataforma durante la pandemia para recibir clases por internet; la empresa farmacéutica Quimbiotec, visita de escuelas, reunión con el sector privado y empresas públicas de servicios básicos y centros de salud que surgieron en revolución.

Hilo textual de la conferencia

“Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde el 2015, al introducir sanciones dirigidas específicamente a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas.

Se impuso un embargo de armas en el 2016, aduciendo que el Gobierno no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas.

En el 2017, Estados Unidos denunció como ilegítima la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela e impuso sanciones al Gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a Pdvsa.

En el 2018, después de las elecciones presidenciales, endureció las sanciones (..) bloqueó las transacciones de Pdvsa.

En enero de 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a Pdvsa, Banco Central y funcionarios gubernamentales y un embargo económico total (...) y le dio a Guaidó total control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano (...) incluyendo a Citgo.

Entre el 2018 y 2019 se dirigieron al oro, al aspecto minero y al sector alimentario, criptomoneda y bancario.

En septiembre 2020, Estados Unidos impuso sanciones a cinco miembros de la Asamblea Legislativa de oposición, por estar supuestamente actuando (...) para manipular elecciones.

También ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de tanques petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos.

Tomo nota de la decisión del Gobierno, del 21 de enero 2021, de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho Gobierno, el día 2 de febrero, para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea (UE) impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas: embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para la represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia e interceptación de telecomunicaciones y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales, cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En 2019, un banco portugués congeló mil 200 millones de fondos del Gobierno de Venezuela.

También dos mil millones congelados en el Banco de Inglaterra.

En el 2017 y 2018 Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos, acusados de represión, violaciones graves de los Derechos Humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos.

En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios del Gobierno.

En 2018 y 19 Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela, congeló los activos e impuso prohibición de viaje a funcionarios venezolanos.

En el 2019 Colombia prohibió el ingreso aproximadamente a 200 venezolanos vinculados con el Gobierno.

Panamá puso sanciones en el 2018 a personas naturales y jurídicas, por lo que consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles acceso a sus servicios de sistemas financieros.

2019 (...) signatarios del Tratado de Río aprobaron una resolución que prometía sanciones selectivas y congelación de activos contra venezolanos supuestamente incurso en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los Derechos Humanos.

El 13 de febrero de 2020 Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del Artículo 14 del Estatuto de Roma, con respecto a las medidas unilaterales coercitivas.

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras. Desde el 2000 el Gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, salud, educación, alfabetización, alimentos, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado (...) se reporta que el ingreso del Gobierno ha disminuido en un 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones, las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias (...) también ayudan...”.

Conclusiones

Luego de hacer una evaluación exhaustiva que han dejado las sanciones y que han calado en la calidad de la producción, en los servicios básicos necesarios para una mejor calidad de vida, en la mano de obra calificada, en la migración, en bajas mortales desde neonato hasta adultez, por falta de medicinas en todos estos años de bloqueo, una visión amplia del panorama, las conclusiones arrojadas en este informe preliminar sobre el impacto negativo de las sanciones, que esperamos sea valorado por la comunidad internacional para que se levanten las restricciones criminales y sobre todo se respete la decisión del pueblo bolivariano de decidir su destino y tomar las riendas soberanas del país, a tener relaciones sociales y comerciales con cualquier nación sin la presión y el bloqueo que pueda ejercer una medida coercitiva que se ha replicado y es multilateral, bajo el respeto al derecho y las leyes internacionales de no injerencia.

Estas sanciones impuestas por los países plegados al derrocamiento del Gobierno bolivariano y debacle de la moral, económica y desestabilización del pueblo, han afectado en todas las áreas de servicios, dañado la institucionalidad en el aspecto laboral con salarios de crisis, aspectos que han resquebrajado hasta el núcleo familiar.

“Veó con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela, afecta los derechos de ciudadanos en terceros países en particular (...) la ayuda gestionada para terceros países a través del ALBA está afectando a beneficiarios más allá de las fronteras venezolanas”, destacó Dohuan.

Para cerrar su intervención antes de comenzar la rueda de prensa la Relatora concluyó: “Reconozco que las sanciones selectivas violan los derechos a un juicio justo, garantías procesales, libertad de movimiento, los derechos a la propiedad y buena reputación. Sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en las elecciones, violan su derecho a tener y expresar opiniones y participar (...) Recomendando a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de acatar los principios y normas del Derecho Internacional, lo que incluye principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de otros, resolución pacífica de los conflictos internacionales. Los insto a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes e institucionales internacionales. Las consideraciones humanitarias deben prevalecer

sobre las políticas y las medidas unilaterales solo pueden imponerse tomando en debida fuente el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, Ley de Refugiados y Ley Humanitaria (...) solo se pueden aplicar en el caso de contramedidas ilegales internacional. Recuerdo que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral, pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de derechos súmales como daño colateral. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de los Estados Unidos a terminar la beligerancia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diesel (...).

(Fuente: P Nahir González teleSUR)